



CRISIS Y CONTESTACIÓN SOCIAL (EPÍLOGO)

807

Las minas de la comarca Andorra-Sierra de Arcos dieron trabajo pero no grandes sueldos durante todo el período de la dictadura. Es verdad que ciertos beneficios sociales (vivienda, economato, formación, ocio...) compensaban algo los bajos salarios. Esta política paternalista de las empresas mineras, sumada al aislamiento de la zona respecto a los grandes núcleos de concentración obrera, hizo que durante esa época no hubiera movilizaciones reseñables salvo las de la huelga de solidaridad con Asturias de 1962 y la de bajo rendimiento en Innominada de 1973. Sin embargo, a partir de 1975 –al igual que pasó en el resto de España– la situación laboral y social entró en un clima de agitación reiterada que daría como fruto la organización de los mineros en fuertes sindicatos y unos convenios colectivos que mejoraron decisivamente las condiciones laborales, así como los aspectos salariales y sociales. Hitos fundamentales en este proceso fueron la constitución de los comités de empresa, la huelga de 1976 en las minas de ENDESA y las elecciones sindicales de 1978. La unidad sindical favoreció el éxito para los mineros de los términos del Segundo Convenio en Endesa en 1978. Sin embargo, la intransigencia empresarial en la negociación del Tercer Convenio –en medio de la dura huelga de 1979– precipitó una ruptura de la unidad sindical que tardaría mucho en recobrase.

El nivel de vida de los mineros se elevó notablemente y esta coyuntura de buenos salarios y crecimiento demográfico por la inmigración laboral arrastraría a los demás sectores, tanto los industriales como los de servicios. El bienestar y el pleno empleo

se instalaron a lo largo de dos décadas en la comarca, sin que se modificara de forma importante la situación hasta finales del siglo pasado, cuando se pusieron en marcha los Planes de la Minería –nacidos de las políticas económicas europeas procedentes de la CECA– que habrían de cambiar notablemente el panorama general.

El plan 1998-2005, desarrollado para reducir y modernizar la producción de carbón, pretendía declaradamente el desarrollo alternativo de las comarcas mineras. Para ello, se involucró a las organizaciones sindicales y empresariales, a las administraciones locales y al Gobierno de Aragón y se invirtieron cuantiosas sumas en infraestructuras, sobre todo, en ayudas a empresas y en líneas de formación. Entre los proyectos aprobados para nuestra comarca cabe destacar los del gasoducto Ariño-Alloza-Andorra, el malogrado proyecto Itaca y la todavía no realizada elevación de aguas del Ebro, amén de las inversiones en carreteras y suelo industrial. Los resultados en este sentido fueron “razonablemente satisfactorios” según la DGA. Pero en materia de empleo lo cierto es que la reducción supuso un golpe decisivo para el sector: de los 22 840 mineros que había en España en 1997 se pasó a los 8290 de 2005, casi 15 000 empleos menos liquidados a base de prejubilaciones, bajas incentivadas y recolocaciones.

El plan 2006-2012 ha sido una continuación del proceso con algunas novedades: la DGA aportaría un 25 % de los nuevos proyectos y se podrían financiar empresas sin ánimos de lucro y proyectos que no fueran de infraestructuras. Aragón recibió algo

más del 3 % de la financiación total y la destinada a nuestra comarca se concentró en Andorra (polígono industrial, parque empresarial y matadero comarcal).

Las consecuencias de estos planes no han afectado solo al sector minero, el motor económico de la comarca, sino al resto de los sectores. La destrucción de empleo significó un inmediato fenómeno de éxodo poblacional y el estancamiento demográfico. La incertidumbre suscitada por los cambios que se producen con los sucesivos planes retrae las inversiones y provoca inseguridad entre la población, en especial entre las familias mineras, que ven peligrar sus empleos y su nivel de vida. Por esta razón ha sido este sector social el que más frecuentemente ha reaccionado contra los efectos de los planes, si bien ha contado con el apoyo de las instituciones políticas locales y ha sido secundado por buena parte del resto de la población, que se siente ligado de alguna forma a la suerte de sus convecinos mineros y al sector del carbón.

Procesos de protesta se han ido registrando con cierta frecuencia en todo este período, como el de 1985 ante el anuncio del primero de los planes citados, como el motivado por la privatización de Endesa o como las más recientes respuestas a los plazos anunciados para el fin de la explotación del carbón y ante la crisis colateral, que están ensombreciendo el futuro de la comarca, sumida en el amargo trance de la agonía empresarial y el desempleo galopante (entre 900 y 1000 parados de media en los tres primeros trimestres de 2013 en una población comarcal total que apenas supera los 11 000 habitantes).